

EL AÑO QUE VIVIREMOS EN PELIGRO

POR JORGE NAVARRETE P., ABOGADO.

La crisis económica no es la única mala noticia para América Latina. Todos los estudios y sondeos de opinión –el más relevante, a mi juicio, el Informe sobre la Democracia en América Latina (PNUD), aunque recomiendo mirar también los últimos resultados de la encuesta POP–, muestran una seria y creciente desafección de los ciudadanos frente a la democracia, el Estado, las instituciones públicas y la capacidad de éstas para contribuir al bienestar colectivo e individual.

Sería largo indagar sobre las razones que explican este fenómeno. Sin embargo, una primera mirada a la región permite esbozar ciertas tendencias generales.

La primera, y la más grave a mi juicio, es la insinuación de que la libertad política no es siempre compatible con la justicia social. Se hace cada vez más frecuente en la retórica de varios líderes latinoamericanos, la idea de que enfatizar un aspecto significa en parte

al servicio de una minoría o grupo de interés. En una democracia unos ganan y otros pierden. Por tanto, no es tolerable que los vencedores, en aras de una supuesta estabilidad, deban pagar el precio de hacer como si no hubieran ganado.

De igual manera, es alarmante la cada vez mayor influencia del dinero en la política, las asimetrías en el acceso a la información o las limitaciones, de hecho y de derecho, para la masiva participación política.

Sin embargo, el gran tema del 2009 para América Latina será la seguridad. El narcotráfico, como la principal fuente de corrupción y degradación de nuestras instituciones; la violencia fuera y al interior de nuestros hogares, que nos condena al miedo y al encierro; o el bienestar propio y de nuestros cercanos. Y todo eso se traducirá en una demanda masiva por mayor contención y cuidado.

Así, la discusión respecto del rol y posibilidades del

Principal peligro: que se extienda la idea de que la democracia no es compatible con la justicia social, com se hace cada vez más frecuente en la retórica de varios líderes latinoamericanos.

desatender al otro. En un contexto de predecibles dificultades económicas, este discurso se hace todavía más peligroso y, por tanto, se requiere una voluntad firme para insistir que no existe ninguna posibilidad de desarrollo para nuestros pueblos si no es en el contexto del más irrestricto respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

La segunda se refiere a nuestra mojigatería para reconocer que la existencia de un régimen democrático tiene como implícito un mínimo de condiciones de dignidad material –civilizatoria, me atrevería a decir– de quienes forman parte de una comunidad política. Incluso, las más mínimas y procedimentales definiciones de democracia descansan sobre este supuesto, el que debe ser explicitado en el marco de la lealtad que esperamos los ciudadanos tengan hacia los valores y principios que inspiran el gobierno de las mayorías, con el debido respeto a las minorías.

A continuación, y a propósito de mayorías y minorías, en nuestra región se percibe un alarmante déficit institucional, que es el caldo de cultivo para la arbitrariedad, la corrupción o el abuso. Las reglas claras mantienen la amistad y en nuestro continente se hace demasiado frecuente que las básicas normas del juego se alteren por parte de los interesados; como si convocados a un partido de fútbol a poco andar un equipo empezara a utilizar las manos o, frente a la inminente derrota, pretendan llevarse la pelota para la casa.

Cuarto, y aunque pudiera percibirse como contradictorio con lo anterior, son recurrentes las restricciones que se imponen a una determinada mayoría política. En muchos países de nuestra región –en algunos aspectos Chile, es un buen ejemplo– cunde la frustración cuando no es posible sortear ciertos enclaves institucionales que no son otra cosa que una ilegítima ventaja

Estado va a adquirir importancia superlativa. La evidencia empírica en nuestra región, contrario a lo que persistentemente ha sostenido la derecha en Chile y en el mundo, muestra el positivo impacto de las políticas sociales en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, se requiere una profunda reflexión sobre la eficacia del Estado, donde los temas de modernización, transparencia y probidad ocupan un sitio central.

En noveno lugar, la oportunidad de la intervención estatal se liga indisolublemente con la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Primero, porque redundaría en mayor eficiencia, por cuanto nadie más que los propios beneficiados pueden sopesar la eficacia real de la intervención estatal. Segundo, porque compromete política y efectivamente a los ciudadanos con la expresión institucional de un proyecto colectivo, permitiéndoles interiorizarse de las dificultades propias de la administración, asignar prioridades e, incluso, postergar sus legítimas demandas en aras de un beneficio común. Tercero, pues la participación es un elemento que contribuye a la dignificación, llenado de contenido particular y cotidiano el concepto de ciudadanía.

En resumen, para superar la crisis de la política se requiere afirmar un único expediente: insistir en más y mejor política. La ausencia de ésta, como la retirada de los ciudadanos del espacio público, será siempre la antesala del abuso político y la precariedad social. El desafío más importante para los latinoamericanos es recuperar la confianza, tanto en el Estado y sus instituciones, como en la bondades de una comunidad organizada y al aporte que los individuos podemos hacer para una región más libre, justa y solidaria. ◀